

C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece **Marco Antonio Núñez San Juan**, quien interpone acción de protección constitucional en contra de **Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes**, representado legalmente por **Nelson Mauricio Rojas Mena**, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento mensual de sus remuneraciones por la suma de \$113.937, sin haber sido informado previamente.

Refiere que con fecha 16 de septiembre de 2016 suscribió en pagaré N° 37.0302223-4 con la recurrida por la suma de \$2.378.763, cuya obligación se pagaría en 36 cuotas mensuales y sucesivas de \$108.398. Sin embargo, indica que por problemas financieros y una estafa que sufrió en dicha época, pudo cumplir con su obligación de pago solo hasta la cuota N° 13, quedando en mora desde la cuota N°14, con vencimiento al 30 de diciembre de 2017.

En razón a lo anterior, indica que la recurrida presentó una de demanda ejecutiva autos Rol C-24338-2018 ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, la cual fue retirada posteriormente.

Agrega que a fines del año 2021 obtuvo un nuevo empleo en dependencia de Obras Ferrovias Chile, y al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2022, con fecha 30 de mayo de 2022, se percató que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de \$113.937.- lo que alega ser un acto arbitrario e ilegal, pues dicho actuar de la recurrida



vulnera sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la Republica.

Finalmente refiere que la deuda se encontraría prescrita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 en relación al artículo 107 de la Ley 18.092.

Motivos por los cales solicita que se declare que la conducta del recurrido es arbitraria e ilegal, aun cuando deje de realizar dicha conducta, por cuanto, subsistirá el riesgo de que perturben, priven, o amenacen los derechos fundamentales; Que producto de lo anterior, se ordene a la recurrida cesar las retenciones efectuadas al recurrente; y se ordene a la recurrida restituir las cuotas descontadas de las remuneraciones efectuadas y que en el futuro pudieren efectuarse; con condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, compareció **Matías Amigo García** abogado, en representación de la recurrida, **Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes**, solicita el rechazo de la acción de protección, señalando en lo pertinente que no existe actuación ilegal o arbitraria alguna, porque los descuentos efectuados se realizaron en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Por otro lado, señala que su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, haciendo presente además que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho.



En cuanto al cese de los descuentos y restitución de las sumas descontadas, refiere que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, su representada ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, conforme a la Orden de No Innovar decretada en autos, disponiendo la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde mayo de 2022.

Que en estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Asimismo, indica que el recurso de protección es improcedente, al no ejercer la recurrente de forma legítima un derecho indubitado.

Por lo anterior, solicita que se declare improcedente y/o rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de mayo de 2022, luego de transcurridos más de cinco años desde que se le otorgó el crédito social contraído con la Caja de Compensación recurrida.

CUARTO: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa y arbitraria al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. En la especie, tal



beneficio resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que trascurió entre el año 2017 y el mes de mayo de 2022, sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones efectivas tendientes a cobrar el crédito. Lo dicho es sin perjuicio, naturalmente, de su derecho para perseguir la obligación por los medios procesales ordinarios.

QUINTO: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde que sea declarado y se otorgue amparo a la recurrente, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente. Del mismo modo, validar su actuación genera un precedente para que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones sociales actúen de idéntica manera.

Sin embargo, el Estado no puede amparar estas conductas ni esta forma abusiva de actuar por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SEXTO: Que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto



Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se acoge, con costas**, la acción constitucional de protección interpuesta en favor de **Marco Antonio Nuñez San Juan**, en contra del la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes , y, en consecuencia, se declara que la recurrida deberá cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente y restituirle los descuentos ya efectuados desde el mes de mayo de 2022, así como todo aquel que se haya efectuado o se efectúe en contravención a la orden de no innovar decretada en estos autos y a este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-80574-2022.



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. y Abogado Integrante Michael Christian Camus D. Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

